

NO HAY ATAJOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO SUBSIDIARIO

Editorial



La crisis institucional que atraviesa la política chilena se aceleró en forma insospechada. La exacerbada colonización empresarial sobre la política logra imprimirle a las reformas de Bachelet, en su diseño original o en la negociación, un sello neoliberal. Sin embargo, la polémica relación entre el empresariado y la política no se reduce a los escándalos de Penta, SQM o Caval, ni siquiera al financiamiento de las campañas o los partidos políticos; más bien, el problema radica en el desfile de ministros, parlamentarios e importantes líderes políticos por los directorios empresariales, que luego retornan a la vida pública y, desde allí, terminan de realizar los dictámenes de la clase dominante.

Reina el vacío político y no parece existir una fuerza partidaria que legítimamente pueda empujar reformas que garanticen derechos sociales y que, por ende, desmercantilicen ciertos ámbitos de la vida social. Pese a las banderas de cambio enarboladas por Bachelet en 2014, terminó reinando el tradicional “gatopardismo concertacionista”. Primero, se intentó presentar las reformas como cambios radicales cuando en rigor no eran más que ajustes a los excesos del modelo neoliberal. Luego, se diferenció entre los que estaban por el cambio gradual, socialdemócratas se dijo, de los maximalistas de siempre que no entendían el cómo se hace *realpolitik*. Sin embargo, la efectividad de este ardid político se derrumbó cuando el hijo de Bachelet apareció involucrado en un escándalo de proporciones y el capital político del Gobierno quedó reducido a su mínima expresión.

Ante este turbulento escenario, se han elevado diversas voces que reclaman como solución política a la crisis la realización de una asamblea constituyente. En parte para evitar la irrupción de caudillos y demagogos, y en parte para responder al descontento de la sociedad con la política.

“el problema radica en el desfile de ministros, parlamentarios e importantes líderes políticos por los directorios empresariales, que luego retornan a la vida pública y, desde allí, terminan de realizar los dictámenes de la clase dominante”

Desde el ex presidente Lagos, pasando por La Moneda hasta el propio MEO han concordado que la solución pasa por cambiar “las reglas del juego” y otorgarle una nueva legitimidad a la desprestigiada democracia representativa. No obstante lo tentadora que resulta esta alternativa, nada se discute sobre si estos cambios servirán para acabar con la subsidiariedad del Estado o modificar en forma sustantiva el patrón de acumulación, menos si se integrarán a la política institucional identidades sociales que la transición excluyó deliberadamente. Es razonable pensar entonces que las tradicionales fuerzas que forjaron la transición apostarán otra vez por una salida elitaria, y la constituyente terminará siendo una fórmula de reordenamiento, espurio sin duda, que prolongará la desarticulación social y el ensimismamiento de la vieja política con la sociedad.

La crisis del Estado subsidiario debe ser un horizonte mínimo para las fuerzas comprometidas con una transformación sustantiva de la sociedad chilena. Sin el cual, no resulta posible pensar en cambios al carácter social de la política y proyectar en ésta a fuerzas sociales que vienen bregando, sin éxito, desde el 2006 en adelante. Es un esfuerzo arduo, que requerirá la constitución de una fuerza política amplia cuyos anclajes sociales deberán ser heterogéneos, pero que no puede caer en atajos que apunten a reoxigenar la vieja política. Sin duda, ésta última volverá a recuperarse, con nuevos rostros y viejas prácticas, pero por más banderas progresistas que enarbole, su propósito será restaurar en el poder a los políticos de la transición ▼

**Fundación Nodo XXI
Santiago, abril del 2015**